



FOTOGRAFÍA: HECTOR FLORES S.

Max Colodro

“En Chile están todas las condiciones dadas para un populismo autoritario”

Por Daniel Rozas

El analista político, sociólogo y doctor en Filosofía Max Colodro, publicó recientemente una columna titulada «Contrastes» (en el diario «La Tercera», el 29 de septiembre) en la que critica la postura de la elite chilena, más interesada en discutir sobre el exorbitante salario de Marcela Cubillos que en abordar la crisis de seguridad que, en los primeros nueve meses de 2024, acumula cerca de 700 homicidios en Chile.

Según Colodro, la clase política a menudo desperdicia en el tiempo en el Congreso, dedicándose a formular acusaciones constitucionales sin fundamento, buscando réditos electorales, en lugar de atender los problemas urgentes que enfrenta la ciudadanía, como la balacera ocurrida en Bajos de Mena (el pasado jueves 26), que dejó a un adolescente muerto y a dos menores heridos.

Conversamos con el académico de la U. Adolfo Ibáñez para conocer su perspectiva sobre la decadencia del sistema político actual, que, a casi cinco años del estallido social, parece seguir deslegitimando las instituciones con su comporta-

El analista político dice que “en la medida que avance el deterioro institucional, la crisis política y el aumento de la corrupción, esta posibilidad se fortalecerá aún más”.

miento errático, ciego a las necesidades urgentes de la gente común. “Tenemos una clase política, sobre todo un Congreso, que es más parte del problema que de las soluciones”, reflexiona.

“Una clase política que no logra entender”

—¿Por qué crees que el debate sobre el sueldo de Marcela Cubillos capturó más la atención de la elite que la balacera en Bajos de Mena?

—Creo que el debate sobre los sueldos de los políticos es legítimo, en especial cuando no ocupan cargos financiados

por el Estado y son contratados por instituciones que reciben recursos públicos. En el caso de Marcela Cubillos, creo que la universidad (San Sebastián) aún no ha dado todavía una explicación razonable de por qué recibía un sueldo tan alto solo por hacer clases. Ahora, lo que me parece sintomático, es que se instala un debate y una controversia sobre el sueldo de Cubillos en un momento crítico en materia de seguridad pública, cuando hay 37 personas fallecidas por actos de violencia delictual en la semana de las Fiestas Patrias y en el contexto de lo que estaba ocurriendo en Bajos de Mena; desviando la atención de problemas más urgentes. Y lo mismo siento que está pasando con otro tema.

—¿Con las acusaciones constitucionales?

—Exactamente. Veo el mismo problema: una clase política que no logra entender y conectar con los problemas, con las urgencias de la gente, y que no logra llegar a acuerdos para implementar medidas concretas en seguridad pública. En vez de enfocarse en eso, ahora el centro de atención son las acusaciones constitucionales, tanto a jueces de la Corte Suprema como a la ministra del Interior. En lugar de buscar

soluciones y generar acuerdos entre oposición y oficialismo para avanzar en medidas concretas y urgentes, vemos a un Congreso y a una clase dirigente más preocupada por los resultados electorales.

—El 18 de octubre se cumplen cinco años del estallido social. ¿El 18-O debilitó nuestra democracia?

—A cinco años del estallido social, lo que queda claro es el alto costo que ha pagado el país en materia de deterioro institucional, debilitamiento de la democracia, colapso del orden público y la incapacidad del Estado para responder a la crisis de seguridad. En materia económica, ¿para qué decir? Lo que uno esperaría es que la clase política, tanto quienes apoyaron el estallido como sus críticos, hayan hecho una autocrítica sobre la legitimación de la violencia en democracia y de los costos que eso ha tenido para el país. Esa autocrítica sigue pendiente, al igual que los acuerdos políticos necesarios para enfrentar en serio la crisis del orden público. Mientras no haya consenso sobre una política de seguridad pública, no se podrán implementar las medidas necesarias. Cuando el Estado pierde el monopolio del uso de la fuerza, la única manera de reto-

mar ese control es ejerciendo la fuerza. Y eso requiere de un Gobierno con la voluntad de llevar adelante las cosas, pero también de una oposición muy generosa que no utilice políticamente esos costos en beneficio propio.

—**¿Si la balacera que ocurrió en Bajos de Mena, sucediera en el barrio alto, cambiaría la respuesta de la clase política?**

—No tengo ninguna duda. Y lo digo con tristeza. Si la violencia relacionada con el narcotráfico, el crimen organizado, la inseguridad, y la cantidad de víctimas, muertos y heridos producto del uso de armas de fuego que afecta a las comunas populares, ocurriera en los barrios de la élite, la respuesta institucional sería distinta. Y yo creo que eso es parte del problema. La violencia que se inicia a partir del 18 de octubre fue una violencia profundamente clasista. Fue una violencia que afectó a los sectores populares, mientras que los barrios altos se mantuvieron al margen. En el barrio alto no se quemó ninguna estación de Metro. No se saqueó ningún supermercado. Me parece vergonzoso que muchos en la izquierda miraran esos hechos con entusiasmo desde su comodidad, sin ser afectados directamente. Durante el estallido social, la gente que vivía en La Dehesa, Vitacura y Las Condes no sufrieron los efectos de la violencia política como si la sufrieron las comunas populares. Por lo tanto, es un acto de hipocresía que los sectores progresistas de izquierda, que viven en los sectores más acomodados de Santiago, avalaran esa violencia. Nunca les tocó directamente ser víctimas y estar afectados por las consecuencias de la violencia política. Y lo mismo está ocurriendo hoy con el crimen organizado y la deserción escolar en los sectores populares.

—**María José Naudon hacía la siguiente pregunta en una columna reciente: "¿Cómo podemos exigirle a la ciudadanía que no opte por un sistema autoritario si hoy la libertad es una quimera y el Estado no garantiza su protección?"**

—Creo que tiene razón. Lo que está incubándose, en esta mirada profundamente segregadora y clasista de la violencia y de la delincuencia, es que finalmente van a ser los sectores populares, la gente que está desesperada por la inseguridad y el miedo, la que puede terminar en un corto o mediano plazo optando por alternativas autoritarias populistas.

—**Juan Pablo Luna dijo en una entrevista a «La Tercera», que el problema de las elites es la legitimidad. Cito: "Más allá de los intentos de solución que el sistema político hace a sí mismo y por el cual se auto felicitan, no se ha logrado llenar de legitimidad a las instituciones".**

—Coincido. Creo que uno de los problemas más graves es la pérdida de legitimidad de las instituciones. Esta legitimidad se ha deteriorado, y un factor clave en esto es el nivel de segregación en cómo se abordan cuestiones como la violencia política, la delincuencia y la inmigración

irregular. También es preocupante lo que está ocurriendo con las tomas y los campeonatos controlados por el narcotráfico y el crimen organizado, que administran territorios y cooptan a las comunidades a través de beneficios económicos y de la entrega cierta seguridad.

—**Luna también piensa que la elite política funciona en un microclima autorreferente.**

—Efectivamente hoy las instituciones y particularmente las instituciones políticas, como el Congreso y el Gobierno, viven en una alienación y en una autorreferencia muy similar a la que se observa en la elite económica y en los sectores más privilegiados de la sociedad. Hoy el sistema político es una correa de transmisión de los privilegios de la elite económica y me refiero al sistema político transversalmente, de derecha a izquierda.

"Chile está latinoamericanizándose"

—**Y con respecto al caso Audios, ¿tú crees que se volvió a instalar el relato de que las elites son abusadoras, o villanas, como las llama el último informe del PNUD?**

—El problema es que las elites son abusadoras de manera mucho más generalizada que el caso emblemático de un abogado en particular. Aquí hay recursos del Estado que desaparecen y que no se sabe, hasta el día de hoy, dónde están. Por ejemplo, los recursos que salieron a través de las fundaciones ideológicamente falsas (caso Convenios) instaladas por sectores que hoy día están en el Gobierno. O sea, son decenas de miles de millones de pesos que no se sabe en manos de quién están y a dónde fueron a parar. Y eso me parece mucho más grave y más sistémico que la anécdota del sueldo de Marcela Cubillos; dejando en claro que me parece que es cuestionable éticamente el sueldo de Cubillos y que debería ser discutido y analizado.

—**Las encuestas dicen que el caso Hermosilla ha comenzado a ser percibido como un tema relevante por la ciudadanía. ¿Crees que un caso como este puede dar paso a un pensamiento público del tipo: "Si ellos actúan de esa manera, ¿por qué no lo puedo hacer yo?"**

—Creo que los casos de corrupción, incluido el caso Hermosilla, refuerzan la percepción de que existe un sector de la sociedad, no solo en el sistema político, que accede a recursos y privilegios a los que el resto no tiene acceso. El caso Hermosilla confirma que hay un sector político transversal que no solo disfruta de redes y tráfico de influencia, sino que también tiene acceso privilegiado a recursos del Estado. Hay un sector importante de la ciudadanía que siente que aquí hay una clase privilegiada, que incluye a políticos y no solo a empresarios. Y por lo tanto, en la medida en que se refuerza la idea de que hay gente que tiene privilegios ilegítimos, la ciudadanía siente que hay un cierto relajamiento respecto de las normas le-

gales y éticas. Esto se refleja, por ejemplo, en la evasión del transporte público en Santiago y en la compra de licencias médicas falsas, que son manifestaciones de esa desconfianza y del ambiente que se ha creado.

—**La gente que paga la micro obtiene un pésimo servicio y más encima mira cómo otros pasajeros no pagan. ¿Existe la sensación de que la honestidad es sinónimo de ser tonto?**

—La gente se convence de que es más lógico evadir el pasaje y conseguir licencias, en lugar de cumplir con las normas. Este no es un Chile de pobreza, sino uno marcado por el engaño y la trampa. Antes, la pobreza digna se manifestaba en cómo la gente subía a las micros y pasaba las monedas del pasaje en una cadena. Hoy con la percepción de que los ricos, los poderosos y los políticos hacen trampa, muchos sienten que pueden hacer lo mismo. La clase política, con su desconexión y su incapacidad para reconocer la segregación en la delincuencia y la violencia desde el estallido social, no se hace cargo de esta realidad.

—**Frente a este escenario, ¿crees que existe el peligro de que un populista llegue al Gobierno en las próximas elecciones?**

—Hoy en Chile están todas las condiciones dadas para un populismo autoritario. Y en la medida que avance el deterioro institucional, la crisis política y el aumento de la corrupción, esta posibilidad se fortalecerá aún más.

—**El periodista británico Michael Reed, que estuvo de visita en Chile, dijo que si tuviera que elegir dos reformas prioritarias para el Gobierno serían la del sistema político y la de pensiones. ¿Estás de acuerdo?**

—Coincido solo con la primera. Creo que es indudable que tenemos un problema gravísimo en el sistema político producto de lo que fue una reforma muy mal hecha en el 2015; una reforma al sistema electoral que terminó con un sistema mayoritario e instaló un sistema proporcional que ha generado fragmentación, atomización y que ha afectado gravemente la gobernabilidad del país. Los dos otros grandes temas en Chile son la lucha contra la delincuencia y el crecimiento económico.

—**¿Qué consecuencias tiene este deterioro institucional?**

—Este deterioro nos lleva a una triste realidad: Chile está, de alguna manera, latinoamericanizándose. La idea de que podríamos ser la excepción en América Latina, el único país que podría eventualmente alcanzar el desarrollo, se ha convertido en un sueño frustrado. En la medida que estos procesos de deterioro no se reviertan, y la clase política, tanto del Gobierno como de la oposición, siga sin hacer lo necesario, se va a ir confirmando que Chile volvió a ser un caso de desarrollo frustrado. Volvemos a ser un caso de desarrollo fallido, tal como lo describió Aníbal Pinto en los años 50.



Chile volvió a ser un caso de desarrollo frustrado".



Si la violencia relacionada con el narcotráfico que afecta a las comunas populares, ocurriera en los barrios de la élite, la respuesta institucional sería distinta".